

COMUNICADORES PARA EL DESARROLLO(*)

Mariano Martínez Dueñas
Experto en desarrollo rural y comunicación audiovisual



Sobran comunicadores para los medios masivos y faltan para el desarrollo

Durante los últimos años han proliferado en las universidades peruanas las facultades de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación. Eran necesarias para formar profesionales en esos campos, pero —como está sucediendo con carreras tradicionales como el Derecho— la oferta laboral ha crecido demasiado con relación a la demanda. Muchos de estos egresados, tanto en Lima como en provincias, tendrán que dedicar buena parte de su tiempo durante varios años a presentar sus currículos en los medios y, en caso de ser preseleccionados, a acudir a entrevistas personales para cubrir los escasos puestos vacantes.

De esas mismas facultades de Periodismo y Ciencias de la Comunicación egresan también los que tienen como especialidad laboral las oficinas de comunicación o de imagen institucional de las instituciones del estado (ministerios, empresas públicas) y de las grandes empresas privadas, pero

probablemente entre todas ellas no absorban más de algunos centenares de profesionales en todo el país.

Esta realidad no difiere mucho de lo que sucede en los países desarrollados. La diferencia radica en que en aquéllos el número de diarios, revistas, emisoras de radio y canales de televisión es mucho mayor que en los países en desarrollo; tienen suscriptores fijos o audiencias más amplias; su facturación anual es elevada debido al mayor poder adquisitivo de los "consumidores" de sus mensajes y, por lo tanto, están en condiciones de contratar a mayor número de profesionales de la comunicación masiva y de pagarles sueldos adecuados.

Lo contradictorio —o quizás la aberración— de esta situación es que en un país en desarrollo se invierte tanto en formar comunicadores para los escasos y escuálidos medios masivos existentes, y sea tan exiguo el esfuerzo por formar comunicadores para el desarrollo. Tan pequeño es

el esfuerzo que en esta misma publicación Luis Nishiumi se ve obligado a hacer las siguientes interrogantes: "¿Qué es comunicación para el desarrollo? ¿Existe proyección laboral para sus egresados? ¿Cuál es el perfil de un comunicador para el desarrollo?" Y a continuación el autor deja constancia de que "ésta son las interrogantes más frecuentes entre muchos estudiantes interesados en cursar la carrera o algunos que ya están en ella"

Las principales razones de esta contradicción aberrante pueden ser:

a) La ausencia de una política estatal para planificar y definir las estrategias de desarrollo del país y los consiguientes requerimientos de recursos humanos para llevarlas a cabo.

b) El supuesto prestigio social atribuido tradicionalmente a determinadas profesiones en detrimento de otras. Las carreras de Derecho y Medicina, por ejemplo, han estado generalmente bien prestigiadas entre los padres con hijos en edad de iniciar estudios universitarios, frente a otras carreras poco "cotizadas", como la Sociología, la Historia y, en general, las ciencias sociales.

c) La falta de profesionales con experiencia de trabajo en el campo de la comunicación orientada al desarrollo del país, y en condiciones de sistematizar sus conocimientos y métodos pedagógicos para transmitirlos a los futuros profesionales de esa especialidad.

d) La escasa importancia atribuida por el Estado y las empresas a la capacitación técnica de sus funcionarios y trabajadores para hacer más eficiente su desempeño laboral.

Escasez de instituciones, con baja calidad y cobertura limitada

Una de las características de los últimos cincuenta años de la historia humana es el vertiginoso avance de la tecnología en casi todos los campos de la ciencia. El drama, sin embargo, es que mientras los centros de investigación y las principales universidades del mundo siguen acumulando información científica y técnica sobre las diversas ramas del conocimiento, aquélla llega por cuentagotas y mal administrada a los últimos eslabones de la cadena. ¿Qué sabe la enfermera de una posta médica de una comunidad alejada de la selva acerca

de las últimas técnicas de recuperación por mordeduras de serpientes? ¿Quién enseña a los albañiles, gasfiteros, electricistas o mecánicos las técnicas y pequeños "secretos" del oficio para mejorar la calidad de su trabajo? ¿Cómo resuelven los empresarios la capacitación técnica de los trabajadores de sus fábricas? ¿Qué información llega a un campesino de la sierra de las últimas investigaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia sobre nuevas técnicas de cultivo de maíz? ¿Cómo puede resolver un pequeño agricultor de la costa los problemas de plagas y enfermedades que se presentan en los cultivos de exportación?

La transferencia de conocimientos y tecnologías a los últimos eslabones de la actividad humana siempre se ha reservado a los llamados técnicos o especialistas, es decir, los que tienen los conocimientos y manejan la tecnología que se quiere transferir. Pero sucede que estas personas generalmente no han sido formadas en educación de adultos, en metodologías de capacitación ni en el uso de medios adecuados para garantizar la eficiencia de los procesos de aprendizaje, herramientas intelectuales necesarias para cualquier comunicación interpersonal orientada a procesos educativos.

En la actualidad existen en Perú muy pocas instituciones dedicadas a proporcionar este tipo de servicios. La oferta de formación técnica desde el Estado se da en los Institutos Superiores Tecnológicos, en los Centros de Educación Ocupacional y en los Centros de Formación Sectorial. Un estudio realizado en 1996 por el Ministerio de Trabajo (MTPS, 1996) dejó constancia de que la calidad de la formación que prestan estas entidades es, en la mayoría de los casos, muy baja, diseñada más desde lo que las instituciones y sus técnicos pueden enseñar que desde las necesidades reales de la demanda de los usuarios.

Para la capacitación de los trabajadores de las empresas industriales se creó en 1961 el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) orientado a capacitar y perfeccionar la fuerza de trabajo de la industria manufacturera. Basado en las experiencias de Colombia y Brasil, el SENATI se financia con los aportes de los empresarios en relación con sus respectivas

planillas. En este caso –y en las iniciativas similares que surgieron durante los años 70 en los sectores de la construcción, telecomunicaciones y turismo– el diseño de formación está basado en la demanda, con lo que han logrado un merecido prestigio, pero con limitaciones en cuanto a su capacidad de cobertura.

La capacitación en el sector agrario

El último sistema de extensión agraria de ámbito nacional se desarrolló en Perú a través del Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (CENCIRA) en la época del gobierno militar de Velasco Alvarado. La institución fue creada para capacitar a los beneficiarios organizados en las Cooperativas Agrarias de Producción y a las Sociedades Agrarias de Interés Social. En 1975 inició sus actividades dentro del CENCIRA el Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación (CESPAC) con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que incorporó el video como herramienta eficaz del proceso de capacitación. Con la subida al poder de Morales Bermúdez y el consiguiente cambio de orientación política, CENCIRA fue dejando de tener presencia en el campo para ser finalmente desactivado en 1980.

A partir de ese momento la capacitación y la extensión agraria dejaron de ser prioritarias, lo que se refleja en los cambios de nombres institucionales y en la escasez de sus resultados.

En 1981 se creó el Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agraria (INIPA), al que en 1987 sustituyó el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial (INIAA) con funciones exclusivamente de investigación. Éste fue sustituido por el INIA en 1992, al que el año 2003 se le asigna el nuevo nombre de INIEA, de nuevo con funciones de extensión, pero con poco presupuesto para realizarla.

La asistencia técnica del Estado llegaba en 2005 a aproximadamente 250,000 campesinos y agricultores, la mayoría a través del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y de Conservación de Suelos (PRONAMACHS) y del Fondo de Servicios

de Extensión Agrícola (FEAS), ambos con trabajo exclusivo en zonas de la sierra. En la zona de la costa estaban actuando dos instituciones del sector público: el proyecto de Investigación y Extensión Agrícola denominado Innovación y Competitividad para el Agro Peruano (INCAGRO) y el Programa de Extensión en Riego y Asistencia Técnica en Prácticas Culturales en los Valles de la Costa Peruana (PERAT).

La necesidad y demanda de servicios de extensión sigue existiendo y creciendo. De ahí que frente a la escasa presencia del Estado, las instituciones privadas vayan llenando el vacío progresivamente. Son muchas las ONG que están dando asistencia técnica a los agricultores, pero su capacidad de cobertura geográfica y el número de beneficiarios son limitados para las necesidades existentes.

El problema se agrava cuando los pequeños y medianos agricultores toman la decisión de dedicar parte de sus tierras a cultivos de exportación. Éstos generan, en principio, mayores ingresos, pero a la vez conllevan costos de producción más elevados y, sobre todo, requieren de la aplicación de tecnologías poco conocidas por ellos. Estas tecnologías tampoco son bien conocidas por los ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas, con lo que los agricultores con intenciones innovadoras quedan excesivamente a merced de las pruebas de acierto y error.

Todo indica que la economía agrícola de la costa peruana está en un rápido proceso de cambio, generado inicialmente por algunas grandes empresas con alta inversión y tecnología de punta, pero al cual se están incorporando como actores importantes los medianos y pequeños productores. Éstos, en gran medida motivados por sus hijos jóvenes con estudios secundarios y hasta universitarios, son conscientes de que tienen que combinar los cultivos tradicionales de bajo riesgo y escasa rentabilidad con otros nuevos que implican más inversión y algunos riesgos, pero mayores ingresos. Están haciendo la apuesta por el cambio, pero necesitan compañeros de ruta.

La necesidad de capacitación es generalmente sentida, aunque no se exprese en una demanda explícita, precisamente porque no hay confianza en la oportunidad y

calidad de la oferta. Para que los pequeños y medianos agricultores innovadores tengan éxito en sus nuevas estrategias –no ya de supervivencia, sino de crecimiento y capitalización– la capacitación es una condición necesaria, aunque no suficiente.

Pero los que han apostado por los productos de exportación con venta asegurada y precios garantizados desde el soporte de alguna cadena productiva, saben que no podrán mantenerse por mucho tiempo en el mercado si no están en condiciones de obtener en sucesivas campañas una alta rentabilidad en su cultivo y una calidad estándar en sus productos. Y son conscientes de que para ello necesitan recibir capacitación y asistencia técnica. Pero éstas deben cubrir no sólo los aspectos técnicos de los cultivos, sino también los costos, financiamiento, tratamiento post-cosecha y calidad del producto para la comercialización.

¿Estado, ONG, empresas, personas naturales?

Los países desarrollados, incluso los defensores de la economía de mercado, han mantenido e incluso incrementado los servicios de capacitación y extensión como medida de política para proteger al sector agrícola con el fin de garantizar su seguridad alimentaria y aumentar sus exportaciones agroindustriales. Esto, junto con los diversos subsidios que acompañan a los cultivos considerados prioritarios, coloca a los agricultores de nuestros países en condiciones desventajosas para competir en sus propios mercados nacionales y –peor aún– en los internacionales.

En el marco del liberalismo económico por el que se rige este gobierno, no parece probable que en el corto y mediano plazo el Estado asuma esa responsabilidad. Por otro lado, tampoco dispone de los recursos humanos necesarios para implementar una estrategia de esa naturaleza, teniendo en cuenta que los profesionales del agro han sido formados para asesorar en los aspectos técnicos, pero no en metodologías de capacitación y extensión.

Las ONG hacen lo que pueden. Con una visión generalmente más lúcida de cómo debe afrontarse el desarrollo del sector rural, encargan a sus técnicos la asesoría a los campesinos y agricultores de sus zonas de influencia; pero se trata en la mayoría

de los casos de acciones poco sistemáticas, con las metodologías tradicionales de la capacitación-visita, los días de campo y la parcela demostrativa, en las que a veces tienen que ofrecer alicientes ajenos a la capacitación, como el almuerzo comunitario.

En el caso de los servicios prestados por el Estado, siempre se ha considerado que su costo debía ser íntegramente financiado por el erario nacional, como cualquier otro servicio público gratuito. Cuando quienes lo prestan son las ONG, lo más frecuente es que también sea a título gratuito, en el entendido de que se trata de una contribución externa en solidaridad con un sector desprotegido de la población o como una compensación parcial de la inequidad social que padecen sus beneficiarios. Pero cada vez hay más ONG que están convencidas de que no es adecuado ni sustentable seguir ofreciendo gratis algo que, por esa misma razón, no se valora; o quizás porque se tiene conciencia de que la calidad del servicio prestado no justifica el pago de su precio.

Aplicando la ley de la oferta y la demanda, habría que pensar que si un agricultor aumenta la productividad de sus cultivos en un 20% como consecuencia de la aplicación de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, no tendrá ningún inconveniente en aportar un porcentaje de la diferencia de sus beneficios a quien le proporcione esos servicios, ya sea una ONG, una empresa privada o una persona natural. El agricultor, por pequeño que sea, en principio no es menos inteligente y pragmático que cualquier empresario de éxito.

También en otros campos

Si se ha hecho una referencia explícita al sector rural es porque nos es más conocido, pero no porque sea el único en el que se requiera de puentes entre la investigación, el conocimiento y la tecnología y sus usuarios finales en actividades directamente relacionadas con la producción y el bienestar de la población. Del conocimiento en abstracto hay que dar el paso al “saber qué hacer” y “saber cómo hacer” en las actividades diarias que permiten que un grupo humano y un país avancen hacia el desarrollo y el bienestar.

Éste es el ámbito de trabajo que los comunicadores deben estar preparados a cubrir con altos niveles de eficacia y eficiencia, garantizando que los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que deben tener las personas con escasa formación y experiencia estén en condiciones de mejorar sus condiciones de vida.

La competencia es un factor que atañe cada vez más a la mayoría de las profesiones y actividades, tanto relacionadas con la producción como con los servicios. Un producto de calidad, un trabajo bien hecho o un servicio bien realizado es la mejor carta de presentación para quien quiera conservar o ampliar su "cartera de clientes". Por el contrario, el que hace su trabajo de cualquier manera tiene que convivir con la incertidumbre de no saber si otros ingenuos caerán en la red de su mediocridad.

La educación en salud, el fortalecimiento de la organización comunal, la capacitación en los "mil oficios" con que las personas de bajos ingresos se ganan el pan de cada día tendrían unos excelentes aliados y compañeros de ruta en los comunicadores sociales que quieran hacer de su vida una apuesta por el desarrollo. Quizás no sea una profesión "con futuro", tal como esos términos han sido tradicionalmente entendidos. Lo que es seguro es que un país que pretenda dar el paso hacia un futuro desarrollo, los necesita ya desde hoy.

El perfil de los comunicadores para el desarrollo

La tarea de acortar la distancia entre el subdesarrollo y el desarrollo está en primer lugar en manos de los políticos; y en segundo lugar -a la par- en manos de los técnicos y de los comunicadores. Se supone que los técnicos están en condiciones de hacer las propuestas y recomendaciones de lo que se debe hacer y cómo hacerlo; los comunicadores tienen la función de servir de puente entre la tecnología disponible y sus destinatarios finales.

El comunicador ideal no existe, como no existe el profesional ideal para una actividad determinada. Pero es posible hablar del perfil del Comunicador para el Desarrollo como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias que debería tener una persona para contribuir eficazmente -desde su profes-

sión o especialidad- al desarrollo de un grupo humano en particular o de su país en general. Estas son las áreas o campos que se consideran más importantes:

A) Formación y experiencia previas

- Formación en el campo de la comunicación social, preferiblemente con experiencia de trabajo con grupos de nulos o bajos niveles de escolaridad (iletrados, analfabetos por desuso);
- Buen conocimiento y uso del idioma, tanto en su forma de expresión oral como escrita, incluido el habla, o forma particular en que se usa un idioma o dialecto en una zona restringida;
- Conocimientos y capacidad de análisis de la realidad social del país y en particular del grupo humano con quien se trabaja;
- Conocimientos y experiencia en metodología de investigación participativa;
- Conocimiento de metodología y técnicas de producción de materiales gráficos y audiovisuales;
- Conocimientos básicos y experiencia en pedagogía de adultos.

B) Habilidades y actitudes

- Capacidad de trabajo en equipo;
- Trato horizontal; respeto y valoración de las formas organizativas y de los conocimientos y formas de interpretar la realidad de sus interlocutores;
- Conciencia de ser un facilitador de procesos de enseñanza-aprendizaje;
- Íntima convicción de que se aprende enseñando y se enseña aprendiendo.

(*) El presente trabajo es una versión resumida y corregida del publicado con el mismo título por la revista *Brújula*, N° 7 de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Mariano Martínez Dueñas

Estudios de Derecho y Economía en las universidades de Deusto en Bilbao y Zaragoza (España). Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Maestría en Educación Ambiental. Ex funcionario de la FAO y de la UNESCO. Consultor independiente en capacitación, desarrollo rural y educación ambiental. (mar-mar@viabcp.com)